
Entre el Consejo Europeo y la Asamblea Euromediterránea

Josep Borrell

Después del Consejo Europeo se celebró en Bruselas la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM). Parlamentarios de todos los países de la UE y del Mediterráneo hemos hecho lo posible para crear una atmósfera de diálogo que supere la crisis de las caricaturas y la nueva situación creada por el triunfo de Hamas en las elecciones palestinas.

Nuestro relativo fracaso para relanzar la asociación con los países del Mediterráneo ha abierto un espacio para aquellos que fomentan el “choque de civilizaciones”. Y, a juzgar por los resultados electorales en el mundo árabe en los últimos meses, hay muchos que apoyan este choque en Palestina, Egipto, Iraq y quizás pronto en otros países.

En este contexto, la retirada de los supervisores internacionales y el posterior ataque israelí a la prisión de Jericó, que impidió al presidente Abbas intervenir ante el PE, ofreció a los islamistas de la región más imágenes en las que apoyar sus ideas.

Por ello es imprescindible encontrar la fórmula para que los parlamentarios israelíes y palestinos puedan seguir sentándose juntos en la APEM. Es el último punto de encuentro que todavía les reúne. Como también es imprescindible que se corrijan los recortes presupuestarios de los programas MEDA. Después de la imagen de Barcelona 2005, la de un partenariado sin *partners*, ese recorte puede acabar arruinando la credibilidad del proceso euromediterráneo.

Así se lo pedí al Consejo, señalando que los compromisos con las políticas que la Comisión considera prioritarias en la Estrategia de Lisboa son incompatibles con el proyecto de Perspectivas Financieras 2007-2013.

El próximo miércoles, en Estrasburgo, tendrá lugar la última reunión de las tres instituciones para llegar un acuerdo sobre dichas Perspectivas. El PE les da tanta importancia porque la UE se enfrenta a un problema de credibilidad: se propone continuamente nuevos objetivos y nuevos campos de acción, tanto en sus políticas internas —investigación o energía, por ejemplo— como en su papel

de actor global, sin dotarse de los medios para alcanzarlos.

Así, en cada uno de los seis años transcurridos desde que el Consejo Europeo se reunió en Lisboa en Marzo del 2000, la economía de la zona euro ha crecido por debajo del 2%.

Estamos, pues, muy lejos de ser la economía más dinámica del mundo, como el Consejo Europeo se propuso entonces.

Las perspectivas parecen ser hoy mejores, pero en estos años anémicos se ha perdido mucho empleo. Y los ciudadanos sólo se sentirán comprometidos con la UE si es capaz de impulsar un crecimiento solidario y sostenible.

Para ello son necesarias reformas y políticas más activas y mejor coordinadas a escala europea. La energía es sin duda una de ellas.

También esta semana la Comisión nos presentará su propuesta revisada de la Directiva de Servicios. El Consejo aceptó que lo haga sobre la base del nuevo proyecto elaborado por el PE. A partir de ahora habrá que llamarla Directiva "Gebhardt", en honor de la diputada socialdemócrata alemana que ha coordinado la elaboración del nuevo texto.

Algunos Estados habían visto en el proyecto "Bolkenstein" una oportunidad para mejorar su competitividad en el mercado interior. Otros creían que era un riesgo de *dumping* social. La confusión entre prestación de servicios y establecimiento había falseado permanente el debate.

El PE ha superado este antagonismo, acotado su campo de aplicación, suprimiendo el polémico principio del país de origen, creando un consenso político mayoritario y evitando un enfrentamiento entre viejos y nuevos Estados miembros.

El PE pide también que la Estrategia de Crecimiento y Empleo respete escrupulosamente el equilibrio entre competitividad y dimensión social, equilibrio imprescindible para conseguir la adhesión ciudadana y evitar que las reformas se vean como sinónimo de bajo salario y de empleo cada vez más precario.

La combinación de flexibilidad y seguridad es especialmente importante para combatir el profundo sentimiento de precariedad, mezcla de realidad para unos y temor para otros, que se está extendiendo en la sociedad europea.

Buen ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en Francia con el rechazo a la ley que establece un contrato de trabajo especial para el primer empleo de los jóvenes. La huelga general convocada para el próximo martes nos recuerda la de 1988 en España contra el contrato de aprendizaje que el Gobierno socialista propuso y tuvo que retirar.

Por eso es tan importante el compromiso del Consejo de que en el 2007 se pueda ofrecer a todo joven europeo un empleo, un aprendizaje o una formación que permita su inserción laboral.

Si hubiera un solo objetivo a retener de sus conclusiones, debería ser éste. Pero no basta con enunciarlo. Tendrían que decir cómo y en qué plazos pretenden conseguirlo. Y cómo van a efectuar el seguimiento de los resultados que se consiguen en cada país.

Habría que recordar el Consejo Europeo de Barcelona en el 2002. Para fomentar la natalidad, se decidió aumentar en un 33% las plazas de guardería para niños menores de tres años y doblar las de niños mayores de 3 años hasta su escolarización. ¿Alguien sabe en qué ha quedado este compromiso?

En el ámbito del envejecimiento de la población y de los desafíos demográficos, hay que insistir en la particular importancia de la política de inmigración. No hay estrategia de crecimiento, empleo y cohesión social que pueda definirse sin tenerla muy en cuenta. Este tema fue el único que superó el quasi monopolio que el conflicto de Oriente Próximo tiene en los debates de la APEM.

La inmigración es un problema europeo. La urgencia llama a nuestra puerta con tintes cada vez más dramáticos. Y no se puede dejar que el problema lo resuelvan solos los países de tránsito o los que están en la primera línea de llegada.

Pero, siete años después del Consejo de Tampere (1999), ¿en qué hemos avanzado, en concreto, en esa política europea de inmigración cuya necesidad han proclamado tantas veces?

Bien poco. En realidad, Europa sigue sin tener una política de inmigración. Estamos haciendo frente a la migración, mientras las decisiones en el Consejo de Justicia e Interior, JAI en la jerga de Bruselas, están bloqueadas.

Esperemos que la voluntad de construir una política energética común, enunciada por el Consejo, tenga mejor suerte.
